

Imprimir

## 1. El debate programático en las elecciones presidenciales

Una particularidad del debate presidencial realizado en Colombia en las elecciones del año 2018 consistió en su carácter programático, como pocas veces se ha registrado en el país; en estas elecciones hubo un debate y sobre todo en primera vuelta, que abordó problemas centrales que enfrenta la sociedad colombiana. Quizás un debate de esta naturaleza se había vivido en Colombia en los años treinta del siglo veinte cuando emergió el reformismo liberal para dar al traste con la república conservadora. Las banderas de reformas sociales agraria, laboral, educativa alrededor del eslogan de la “revolución en marcha” de López Pumarejo en aquellos años o la campaña del disidente liberal Jorge Eliécer Gaitán en las elecciones presidenciales de 1946 que volvió a poner en el centro el problema de la tenencia de tierra, la paz, y la exclusión social profundizando la reforma liberal de los años treinta del siglo XX, fueron antecedentes de lo que se vivió en los primeros meses del año 2018 alrededor del debate presidencial.

La campaña presidencial de 2018 enfrentó al viejo establecimiento tradicional pegado al modelo neoliberal extractivista, de internacionalización de la economía alrededor de los tratados de libre comercio, con programas asistencialistas como familias en acción y en general alrededor de políticas públicas sociales de subsidios a la demanda, un modelo agroexportador y minero. Un modelo basado en profundizar la precarización laboral y la rebaja de los impuestos a los ricos con la falacia de que menos impuestos a los empresarios, traerán mayor inversión y generación masiva de empleos. Profundizar el modelo privatizador que considera como su axioma inexorable que el mercado por sí solo arreglara todos los problemas de la economía y que el mercado es el instrumento esencial para asignar de manera adecuada la inversión pública.

Por ello sobra debatir sobre políticas de fomento o de industrialización, intervención del Estado en generación de energías limpias, por ejemplo, o reforma agraria para la redistribución de la propiedad en un país con una concentración que medida por el índice de Gini ha llegado en el año 2018 al 0,91 medido por ese indicador en que 1 sería la desigualdad total en donde un solo propietario sería el dueño de toda la tierra productiva. Este modelo

fue defendido en la campaña por el hoy presidente, Iván Duque Márquez, y por Germán Vargas Lleras y en lo esencial contaba con el apoyo del santismo que en sus vertientes más representativas concurren a apoyar a Duque cuando este derrotó a Vargas Lleras y pasó a segunda vuelta. El tema de la división en este bloque no estaba representado en la crítica del modelo sino en el tema de la paz y los acuerdos con la guerrilla de las FARC-EP. Duque intuyó esta realidad y por ello para facilitar el respaldo de esta fracción prometió que no haría trizas el acuerdo de paz sino que le haría unas reformas. Con ello allanó el camino para lograr en segunda vuelta el respaldo de todo este sector y con ello garantizó, como ocurrió en efecto, la victoria en segunda vuelta.

En esta campaña emergió alrededor de la candidatura de Gustavo Petro Urrego una propuesta coherente de reformismo democrático. Cambiar la matriz del modelo de desarrollo fue su planteamiento central abandonando el modelo productivo basado en la quema de los combustibles fósiles y su reemplazo por un modelo basado en las energías limpias que debería tener una decidida intervención el Estado en la inversión y el estímulo a la generación de energía solar, eólica, hídrica, poniendo en marcha un período de transición hacia la producción y el uso de energías limpias amigables con el medio ambiente. Abandonar en el mediano plazo el extractivismo minero y poner desde ya en marcha una política pública en esa dirección. Especial lugar tuvo en esa campaña la protección de las fuentes hídricas privilegiando su protección de los desastres ocasionados por las industrias extractivistas y sobre todo por la gran minería.

Al unísono con lo anterior debería promoverse la activa participación del Estado en la transformación del modelo productivo hacia las industrias transformadoras y creativas teniendo como base la informática para lo cual debería desarrollarse una profunda reforma educativa. Una reforma de la educación superior para garantizar cupo universitario gratuito a la juventud universalizando su acceso sobre todo para los sectores populares. Tal reforma se señaló tendría un costo de 14 billones que se obtendrían de la eliminación de las exenciones de pago de impuestos de grandes empresarios y grupos de poder que están exentos de pagos de impuestos.

Habría que poner en marcha un proceso de redistribución de la tierra al tenor de los Acuerdos suscritos por el Estado con la desarmada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, que contemplaron la puesta en marcha de un fondo de tierras para la paz que en 12 años debería redistribuir la propiedad entregando de forma gratuita tres millones de hectáreas en los próximos 12 años a campesinos sin tierra y a víctimas del conflicto armado; así como la formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas en beneficio de pequeños y medianos propietarios al tiempo que se promovería el levantamiento de un catastro rural multipropósito orientado a que los terratenientes paguen impuestos cosa que no hacen o lo hacen en niveles muy bajos. Todo este programa debería orientarse a la producción de alimentos para lograr la soberanía alimentaria. Colombia como producto del modelo es hoy un importador de alimentos. Colombia importa 13 millones de toneladas de alimentos por año.

En el centro político de la contienda se ubicaron los candidatos Sergio Fajardo y Humberto de la Calle que hicieron malabarismos para intentar desde el centro una respuesta programática a los acuciantes problemas de un modelo económico que da como resultado una profunda desigualdad social, una concentración irritante de la propiedad, una desastrosa destrucción del medio ambiente. Algunos de sus planteamientos coincidían con el reformismo democrático de Petro sobre todo al final de la primera vuelta sobre todo en temas relacionados con la educación y la protección del medio ambiente. Sin embargo no lograron una propuesta holística y coherente y en ocasiones cayeron en la estigmatización de la candidatura reformista de Petro a la cual en no pocas ocasiones calificaron de castrochavista y populista al tenor con los grandes medios de comunicación para quienes la reivindicación de las causas populares es simple y llanamente populismo.

En el debate el reformismo democrático logró poner en el centro de la discusión estos temas lo que llevó a compromisos demagógicos por parte de la campaña de Duque que se le han devuelto como un bumerang. Duque prometió una rebaja generalizada de impuestos tanto para las clases trabajadoras como para los empresarios con la falacia de la generación masiva de puestos de trabajo y la promesa de no implementar la técnica del fracking para la explotación de los hidrocarburos. A pocos días de asumir la presidencia anunció la rebaja de





Plan de Desarrollo: Pacto por Colombia pacto por la Equidad.  
Profundización del Modelo Neoliberal

que de acuerdo con la Constitución Política de Colombia es la ruta en que se concretan los

Senado de la República lo aprobó sin que hubiese sido publicado como exige la norma de la ley del plan de desarrollo y mucho menos discutido- ratifica lo dicho anteriormente, es decir, se mantiene incólume y se profundiza el modelo neoliberal vigente en Colombia desde la apertura económica puesta en marcha desde el Gobierno del Liberal César Gaviria Trujillo (1990-1994).

El plan incluye nuevos estímulos y facilidades para la inversión de las multinacionales dedicadas a la extracción de hidrocarburos y minerales relajando los mecanismos de control y las exigencias para la protección del medio ambiente. Incluso y pese a las promesas del candidato Duque se aprueba el uso de la técnica del fracking para la explotación de hidrocarburos contrariando decisiones del poder judicial que hasta ahora no lo habían autorizado.

En materia laboral se profundiza la precarización autorizándose de hecho el contrato por días y por horas echando por la borda la legislación laboral que obligaba al pago del salario mínimo. Ello en un mercado laboral en que el 65% de la fuerza laboral realiza sus labores en la informalidad. En materia de salud los grandes ganadores son los intermediarios financieros que ven fortalecidas sus actividades profundizando la salud como negocio y no como derecho en abierta violación de la Ley estatutaria de la Salud que estableció la salud como un derecho fundamental autónomo exigible a las autoridades públicas.

En educación no se afrontan los grandes retos de la jornada única, la educación para la niñez de entre los cero y los cinco años y a duras penas se contemplan los recursos acordados con los estudiantes universitarios después de su exitosa huelga que logró recursos para afrontar la crisis de financiamiento de las 32 universidades públicas estatales.

No hay una política coherente de desarrollo económico. Todo de nuevo se deja al mercado. No hay política industrial ni política para los 12 millones de campesinos a los cuales apenas se les menciona una vez en las más de 1600 páginas en las que se plasma el Plan rimbombantemente denominado Pacto por Colombia Pacto por la Equidad. Ni líneas de crédito ni de fomento para la economía campesina que provee el 70% de los alimentos que

